

## El biometano avanza en Europa, pero España necesita certezas regulatorias a la altura del potencial existente y del apetito inversor

El biometano se consolida como una de las piezas más versátiles de la transición energética europea, con capacidad para reducir emisiones, dinamizar el medio rural y reforzar la seguridad de suministro. La inversión avanza, los proyectos se multiplican y el potencial técnico está identificado. Sin embargo, la falta de ambición normativa amenaza con frenar su despliegue. En España, el interés del sector contrasta con un marco normativo todavía inmaduro. La oportunidad es clara, pero el tiempo para aprovecharla es limitado.



**Joan Batalla**  
Presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas)

El biometano constituye una de las opciones más prometedoras —e infravaloradas— de la transición energética que Europa persigue con ahínco en su intento de alcanzar sus objetivos climáticos y energéticos. Sin embargo, como revelan los recientes datos del Biomethane Investment Outlook 2025 de la Asociación Europea del Biogás (EBA), el sector se mueve entre el optimismo que genera su enorme potencial y la frustración provocada por la incertidumbre regulatoria.

La realidad es que la capacidad de producción de biometano en todo el continente ha alcanzado los 7.000

millones de metros cúbicos anuales en el último ejercicio, lo que representa un aumento del 9% respecto al anterior. El apetito inversor sigue siendo fuerte, con 29.000 millones de euros comprometidos en nuevos proyectos, aunque el ritmo de crecimiento empieza a ralentizarse en comparación con años anteriores. Esto demuestra que la confianza inversora persiste, pero la falta de certezas podría estar afectando al desarrollo real del sector.

El análisis más reciente apunta a una inversión prospectiva de más de 28.000 millones de euros destinados



a inversiones en futuras instalaciones de producción de biometano en el horizonte 2030. Según este informe, España lidera las expectativas con hasta 4.800 millones de euros y una capacidad proyectada de 17,3 TWh anuales, la más alta del continente. A esto se suman las más de 50 plantas actualmente en distintas fases de desarrollo. Esta aparente posición de liderazgo puede confundirse con un caso de éxito, pero basta con analizar el contexto para comprobar que, en realidad, refleja el retraso acumulado de nuestro país en el impulso del biometano, especialmente si se compara con Alemania o Francia, países que ahora proyectan unas perspectivas de inversión más moderadas, pero solo porque llegan a este punto con los deberes ya hechos.

En un entorno global cada vez más exigente, Europa necesita una política energética clara, ambiciosa y cohesionada, pero también flexible, para asegurar simultáneamente la sostenibilidad, la seguridad de suministro y la competitividad económica.

Los datos no dejan lugar a dudas sobre el apetito inversor generalizado en el continente, con esos 28.000 millones de euros comprometidos y 900 plantas previstas en los próximos cinco años. Sin embargo, en muchos casos este entusiasmo choca con la ausencia de marcos normativos claros, la falta de objetivos vinculantes y los obstáculos administrativos en los procedimientos de autorización.

Un ejemplo claro de esto es que, mientras otros países avanzan con decisión, España aún camina con timidez. El PNIEC fija un objetivo de apenas 20 TWh para el biogás en 2030, muy por debajo del potencial técnico identificado y del apetito inversor actual existente.

Este desfase resulta aún más llamativo si atendemos al nuevo marco europeo. Directivas como la RED III, EPBD o ETS2 o el propio paquete legislativo del hidrógeno y gas descarbonizado colocan a los gases renovables como actores relevantes de la estrategia energética europea. Esta ambición normativa permitiría reducir la dependencia del exterior, avanzar en la descarbonización y reforzar la seguridad energética.

En el caso español, el interés demostrado por promotores e inversores -el sector estima que podríamos alcanzar los 29 TWh al final de la década, con al menos 685 plantas en operación- se ve amenazado por retrasos administrativos, falta de coordinación normativa entre administraciones públicas y la ausencia de una hoja de ruta nacional ambiciosa.

En el terreno regulatorio, la reciente Circular 2/2025 de la CNMC, que regula la conexión de nuevas plantas a la red, es un avance importante. Pero aún quedan retos

clave por abordar, como la revisión completa del sistema retributivo y de peajes del sistema gasista para el próximo periodo 2027-2032, la necesidad de acelerar la digitalización del sistema con el despliegue masivo en los hogares de los contadores inteligentes y de la pendiente transposición de la Directiva (UE) 2024/1788 del Paquete de Gas e Hidrógeno, que debe garantizar la plena integración del biometano en el mercado gasista nacional.

El contraste con países como Francia es revelador. Allí, una regulación clara y una estrategia decidida han situado al país como líder en número de plantas operativas y capacidad instalada, demostrando hasta qué punto una regulación clara y los incentivos adecuados marcan la diferencia.

Tal es así que Francia ha superado a Alemania tanto en volumen de producción como en número de instalaciones. Mientras tanto, países como Reino Unido y la propia Alemania experimentan estancamiento. El Mapa Europeo del Biometano y el Informe de Perspectivas de Inversión 2025 dibujan un panorama de un sector con un potencial inmenso, capaz de alcanzar 8.300 millones de metros cúbicos anuales en 2030 y contribuir a una visión a largo plazo de 150 bcm de biogases para 2050. Pero sin una acción política decidida, ese potencial corre el riesgo de quedar sin materializarse.

Más allá del ámbito ambiental, el biometano constituye una herramienta poderosa para reactivar la economía rural, impulsar la innovación tecnológica y reducir la dependencia energética. Su producción a partir de residuos agroganaderos, urbanos o industriales lo convierte en una pieza clave de una economía verdaderamente circular.

España dispone de materia prima abundante, infraestructura gasista moderna y resiliente, y un tejido empresarial dispuesto a invertir. Pero sin una apuesta política firme —como la adopción de objetivos vinculantes o la inclusión del biometano en las subastas de renovables—, esa ventaja competitiva puede evaporarse.

Este llamado a la acción se refuerza con la visión estratégica del sector para consolidar el papel de los biogases como columna vertebral de un futuro energético más circular y resiliente en Europa. Así, se insta a la Comisión Europea a adoptar un objetivo vinculante de 100 bcm de biogases para 2040, respaldado por una Carta Europea del Biogás que coordine los compromisos nacionales, agilice los permisos y fortalezca las infraestructuras.

En este contexto, el mensaje claro: el sector está preparado para entregar resultados climáticos, energéticos y económicos, pero no puede hacerlo solo. Necesita reglas del juego estables, previsibilidad a largo plazo y



verdadera voluntad política. En la misma línea, si España quiere transformar sus previsiones en una historia de éxito, deberá pasar de la retórica a la acción.

Reconocer el valor estratégico del biometano pasa por establecer un marco normativo ambicioso, justo, predecible y eficiente. No solo para mantener y operar las infraestructuras existentes, sino para modernizarlas, facilitar la integración de nuevos vectores, atraer inversión y garantizar una transición ordenada, inclusiva y segura.

En este sentido, todo el sector también sigue muy de cerca la revisión del marco retributivo 2027–2032 que está llevando a cabo la CNMC y que se presenta como una oportunidad crítica para definir ese futuro. Las credenciales están ahí: gracias a una red moderna, interconectada y diversificada, respaldada por más de una docena de fuentes internacionales, el sistema gasista español ha garantizado la estabilidad incluso en los peores momentos: la pandemia, la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania o fenómenos climáticos extremos. Lejos de ser una solución provisional, se ha convertido en un activo estructural de la transición energética, como también puso de manifiesto su contribución a la recuperación del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril.

En definitiva, aprovechar el potencial del biometano es hoy más urgente que nunca. Los gases renovables permiten reducir la dependencia energética, mejorar la competitividad y reforzar la soberanía energética tanto a nivel nacional como europeo. Todo ello, además, a partir de recursos locales y mediante el uso, en buena medida, de infraestructuras ya existentes.

España tiene ante sí la oportunidad real de construir un modelo energético flexible, resiliente y basado en la neutralidad tecnológica, aprovechando todos esos recursos disponibles. Contamos con tecnología, conocimiento, experiencia e infraestructuras sólidas, y un sector preparado para liderar este proceso. Pero sin decisión política, ambición regulatoria y visión estratégica, ese potencial corre el riesgo de quedarse sin materializar. Los gases renovables no son una opción secundaria: son un pilar esencial para garantizar la seguridad energética, cumplir los objetivos climáticos, descarbonizar todos los usos finales de la energía y reactivar el tejido productivo del país.

El momento de actuar es ahora. 🌈

